LA IMPOSICIÓN DE COSTAS EN JUICIOS PREVISIONALES. NUEVAS MIRADAS

Toranzo, María Rosana

Publicado en: LA LEY 31/08/2023 , 6

Sumario: I. Introducción.— II. Sobre la declaración de oficio que realiza la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y los fundamentos del Ministerio Fiscal que la descalifican.— III. Tratando de ponerle palabras a las excepciones de los ministros y la inconstitucionalidad del art. 3° del decreto 157/2018.— IV. Lo relevante del fallo "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS". Costas a la vencida. Daños.— V. Otras miradas, nuevos paradigmas y la importancia de los principios de la seguridad social.— VI. Conclusión.

Cita: TR LALEY AR/DOC/2034/2023

[\(*\)](#)

I. Introducción

En el marco de los nuevos paradigmas del Derecho, desde una mirada crítica y a los fines de aportar algunas interpretaciones en cuanto a los efectos y la importancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en autos "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (346:634 22/06/2023), habremos de tomar algunas consideraciones que fundan la admisión del recurso extraordinario y que dejó ceñida la cuestión, tan solo a la imposición de costas en juicios previsionales.

Un tema que trae luz a la seguridad social en cuanto el máximo tribunal —por unanimidad— si bien revoca la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia— (Chubut FCR 021049166/2011), que modificó "de oficio" la imposición de costas de primera instancia (por su orden) y *carga las de segunda instancia a la vencida (ANSeS) declarando la Inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018* [\(1\)](#), cuya validez hasta el momento no se había dirimido en esa instancia.

Un asunto de enorme envergadura en materia previsional, ya que no solo vuelve a traer a manos de la Corte la discusión del control de constitucionalidad de oficio [\(2\)](#) y la posible multiplicación de sus efectos [\(3\)](#), sino que zanja la discusión con relación a la aplicación del art. 21 de la ley 24.463 [\(4\)](#) que imponía las costas en el orden causado.

De este modo se pone fin a las contrapuestas decisiones que vienen generando una profusa e inestable Jurisprudencia previsional, ya que sentencias de diversas circunscripciones, tanto en primera como en segunda instancia, se han erigido a favor y en contra de la imposición de costas en el orden causado.

Una más de las tantas discusiones que llevan a eternizar los procesos previsionales y a congelar derechos, cuando —como en el caso de la Sra. Blanca Azucena Morales— después de 15 años se le reconoce el derecho a beneficio de pensión por el fallecimiento de su esposo acaecido el 24/12/2008.

En esa dirección, y en pos de descifrar otros alcances y repercusiones del fallo, analizaremos algunos de los tópicos fundamentales relacionados con la revocación de oficio que hizo la Cámara respecto de las costas en el orden causado, un verdadero plus al reconocimiento de los derechos sociales que, tanto constitucional como internacionalmente, han sido ratificados por el Estado argentino y que —por casualidad o no— se admiten, aplican e invocan por jueces o tribunales civiles.

Una situación de hecho que permite demostrar la importancia de que existan otras formas de mirar un idéntico objeto [\(5\)](#) y que plantea un verdadero desafío para juzgados y cámaras de la Seguridad

Social, los que parecen atrapados por el sistema normativo que proveen las inconstitucionales normas previsionales. Algo que al menos —*prima facie*— no parece trascender a otros fueros, cuyos magistrados, basados en "principios y valores" de relevancia jurídica, terminan por desnudar la disfuncionalidad de la seguridad social en cuanto sistema cerrado, algo que se irá develando del presente análisis.

En otro orden, pero en idéntico sentido, trataremos de dilucidar dos de los aspectos que parecen trascendentes del fallo "Morales": por un lado los variados aspectos que pone en tela de juicio el Fiscal en su dictamen; y, por otro, el sentido de las consideraciones realizadas por los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti en su voto, cuando disponen: Que los agravios de la apelante (ANSeS) ...encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen del señor Procurador Fiscal, que se comparte —*con excepción del segundo y tercer párrafo del acápite IV y del segundo y tercer párrafo del acápite VI*—... Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia respecto de lo resuelto sobre las costas de la primera instancia y *se la confirma en lo referente a las costas de la alzada y a la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto de necesidad y urgencia 157/2018*".

Todo ello —en clave previsional— sin perder el anhelo de que el máximo tribunal argentino abra nuevos horizontes tendientes a ampliar el reconocimiento y la protección del derecho humano a la seguridad social.

II. Sobre la declaración de oficio que realiza la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y los fundamentos del Ministerio Fiscal que la descalifican

De la lectura de los fundamentos sobre los que la Cámara revierte el fallo de primera instancia que impuso costas por su orden, se advierte cómo el tribunal, después de decidir, fundar y determinar los extremos y la procedencia del derecho a beneficio de pensión de la Sra. Morales, expresa en el acápite IX: "Finalmente, pese a no existir controversia respecto de la forma en que fueron impuestas las costas en la sentencia de grado, resulta necesario traer a colación la doctrina de la Corte Suprema de justicia de la Nación en cuanto establece que, al momento de la decisión, corresponde a los jueces (6) merituar y atender a las circunstancias existentes aunque éstas sean sobrevinientes (Fallos 322:1318; 324:1096 y 1878; 325:2275, 2637 y 2982; 326:3975; 327:247, entre muchos otros), en especial cuando la modificación sustancial a considerar deriva de un nuevo marco normativo que regula, en cuanto aquí interesa, la imposición de las costas procesales en materia previsional, dada la introducción legislativa del art. 36 de la ley 27.423 (7) que establece expresamente que... *en Seguridad Social, las costas se impondrán a la parte vencida, eliminando con dicha normativa el beneficio de excepción que el art 21 de la ley 24463 le confería al ANSeS y que desde el año 1995 la apartaba de los "principios" que imperan en la materia.*

Por lo que enderezada la tarea a mantener el imperio de la Constitución, la Cámara de Apelaciones reduce el análisis a verificar la validez del art. 3° del Decreto 157/2018, con el que el Poder Ejecutivo pretendió derogar la norma general de honorarios —ya vigente— y declara su Inconstitucionalidad: *...Ello impondrá la aplicación de los "principios axiológicos" en la determinación de la parte que deba soportar los gastos causídicos, principios que encuentran su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, lo cual impone que el litigante que ha sido vencido en el juicio, cargue con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, ello conduce a que deba revocarse la forma en que fueron impuestas las costas en la anterior instancia, debiendo establecerse las mismas y las de la Alzada a la demandada vencida*".

Este fundamento —por demás razonable— (8) devela la vasta armonización que el tribunal realiza del ordenamiento interno e internacional basado en la aplicación no solo de la normativa imperante, sino de los "principios y valores" que son los que le permiten al juzgador adoptar las

medidas necesarias para asegurar su eficacia, con el fin de mantener la tutela efectiva los derechos (9), que manda asegurar el *principio de progresividad* de los derechos humanos (10). Cuestión que lleva a ponderar favorablemente la predisposición del tribunal de apelación, cuando somete a revisión la validez de uno de los efectos más imprósperos de la ley 24.463, que introdujo normativa procesal totalmente anómala, contraria a toda lógica jurídica y razonabilidad posible, al imponer por (el art. 21) cargar al jubilado vencedor con sus gastos. Ello sin mencionar que lo hace con el único fin de desanimar a los adultos mayores a ejercer sus derechos y ahorrar el dinero de las costas, para compensar los desequilibrios económicos del país... como si eso fuera posible o hiciera diferencia alguna a la economía argentina.

Que contra dicha resolución se alza el ANSeS y recurre por la vía extraordinaria y dice que históricamente las leyes 18.477, 19.038 y 19.490 establecieron la exención de costas para los organismos de la seguridad social, ya que a los entes previsionales no se los debe considerar partes litigantes en un proceso al actuar como poder público en pro de defender la legalidad de un acto administrativo y procurando una interpretación uniforme de la normativa previsional (11).

Un argumento falaz, que debió ser desestimado en todos sus términos por la Corte Suprema, ya que desde la creación de la *Administración Nacional de la Seguridad Social* (ANSeS - Decreto 2741/1991) su actividad nunca se ha encaminado a defender legalidad alguna de las normas previsionales, por el contrario se ha destacado por interponer trabas administrativas, además de múltiples e infundados recursos, tendientes a demorar los procesos hasta lapidar a los viejitos. Lo que permite demostrar que la eximición de costas otorgada al ANSeS por la supuesta prevalencia de la "ley especial 24.463 de Solidaridad Previsional", se encuentra lejos de ser legítima, ya que a través de ella lo único que se logró fue promover su inconducta procesal (12) mancillando "el tiempo" en cuanto valor máspreciado de los ancianos.

De allí que siendo el Ministerio Fiscal el que tiene la facultad de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art 1 ley 27.148), y que por el art. 120 de la CN tiene el deber de garantizar su efectiva vigencia y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos, debió *adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la persona mayor* y basado en los principios, valores, (13) derechos y razones jurídicamente ajustadas a la Constitución Nacional en favor los ancianos; debió sostener la decisión de la Cámara en beneficio de los vulnerables.

Si de coherencia se trata, es el mismo fiscal quien cita en su dictamen el fallo "Alberini, Constante Pablo c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad" (325:2774) (Voto: Mayoría: Nazareno, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López. (Abstención: Moliné O'Connor, Vázquez, año 2002), donde precisamente lo que se ordena es revocar el pronunciamiento que de oficio *dispuso la supresión del reajuste de las mensualidades*, al considerar que la alzada incurrió en exceso de jurisdicción al modificar el reajuste —en perjuicio del jubilado—, ya que no consiente la admisión de la declaración de oficio, porque con ella se lesiona un derecho constitucional superior, el derecho del jubilado y su dignidad.

Un fallo con una decisión por demás ajustada a los principios protectorios de las personas mayores que venimos enumerando a lo largo de estos párrafos y que —*a contrario sensu*— en el punto IV, apart. 1, Abramovich explica que la sentencia incurrió en una *reformatio in pejus* (14), ya que modificó la condena en un punto que se encontraba firme, pues no mediaba agravio alguno referido a ello, por lo tanto cabe concluir que la Cámara actuó de manera arbitraria e incurrió en un exceso de jurisdicción, por lo que la sentencia debe ser revocada en este aspecto.

Sin pretender justificar situación procesal alguna ni desentendernos de la importancia del derecho de defensa en juicio y el debido proceso, no se puede dejar de mencionar que por las características particulares —tanto del cliente previsional entrado en años— como la de su representante, se encuentran sometidos a elongados procesos caracterizados por la desigualdad, en la que los coloca las injustas leyes que se aplican, de allí que la falta de apelación e interposición de recursos no se compadece con el desconocimiento, el desinterés o la decidía, sino con el objetivo de evitar abrir

instancias que puedan ralentizar el juicio, ya que la mayoría de jubilados no pueden esperar 15 años para cobrar, porque es su único sustento. Situación que los previsionistas ponderan según circunstancias de tiempo y lugar (15).

No obstante ello —y en el caso que nos ocupa— la falta de agravio a la que alude el fiscal tampoco parece motivar firmeza alguna con relación al tema costas; muy por el contrario, de los fundamentos del recurso de ANSeS se advierte que el principal agravio refiere a la concesión del beneficio (derecho de fondo), por lo que, resuelto el *thema decidendum* (16) por el principio de congruencia (entre otros), resultaría irrisorio que se la cargue con las costas al jubilado, no solo por su accesoriadad, sino porque, como afirmó la Cámara Nac. en lo Civil y Comercial Federal... *dada la modificación sustancial a considerar, deriva de un nuevo marco normativo que regula la imposición de las costas procesales en materia previsional, a cargo de la vencida vigente al tiempo de resolver el fondo.*

Por lo que sostener que hubo exceso de jurisdicción por parte de la Cámara es desentenderse de la dinámica a la que actualmente se deben enfrentar los jueces, tal y como lo afirmara Bazán cuando expresa: "se enfrentan a una nueva realidad a la que deben amoldarse, caracterizada —*inter alia*— por la ampliación del parámetro de control de constitucionalidad de la normativa infraconstitucional, la que —además de la Ley Fundamental— deberá ser cotejada con los instrumentos internacionales que conforman el estatuto básico de los derechos humanos. Es así indudable que la creciente evolución del Derecho internacional de los derechos humanos diversifica los retos que se posan sobre la magistratura judicial, entre los que se cuenta la imprescindibilidad de manejar una multiplicidad de fuentes (otrora inexistentes o con una carga preceptiva entonces posible de mediatizar) y de reestudiar diversas categorías jurídicas a la luz de las pautas internacionales" (17).

Por idénticos fundamentos, tampoco parece ajustado considerar que sobre las costas hubo cosa juzgada (18), la sentencia fue apelada por ANSeS y ejerció con soltura su derecho de defensa a través del recurso extraordinario; por el contrario lo que resulta desajustado a derecho y resulta arbitrario es seguirle reconociendo derechos y garantías constitucionales a una institución que — como ANSeS— permanentemente abusa del Derecho (19), contraviene en sus acciones la buena fe, la moral y las buenas costumbres e interfiere maliciosamente en la marcha de los procesos, promoviendo litigiosidad y demora.

Como lo expresó Rojas (20), es la Corte la que tiene la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales y, por lo tanto, el único órgano que podría poner coto a estos conocidos y denunciados abusos, ya que, en definitiva, lo que se discute —tanto en "Morales" como en otras tantas causas previsionales— son los *ires* y *venires* interpretativos— dentro de un marco jurídico inconstitucional, que desde la sanción de sus leyes viene vulnerando la integralidad y proporcionalidad retrogradando el derecho constitucional de jubilados y pensionados (21).

III. Tratando de ponerle palabras a las excepciones de los ministros y la inconstitucionalidad del art. 3° del decreto 157/2018

Sin pretender convertirnos en intérpretes de los silencios del máximo tribunal, y solo tratando de avizorar ciertos destellos que pudieran dar luz a la ampliación de criterios respecto de derechos previsionales, no se pueden dejar de mencionar las excepciones que marcan los ministros Rossatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti en los considerandos de sus votos. Lo que en cierto modo muestra apartamiento de algunos de los fundamentos del dictamen del fiscal cuando expresan: "...que esta Corte comparte —*con excepción del segundo y tercer párrafo del acápite IV y del segundo y tercer párrafo del acápite VI*—:

- A saber en el párrafo 2° del acápite IV del fiscal; justo en dicha referencia el dictamen argumenta sobre la vigencia de las leyes y dice: *Que el juez de grado había efectuado una correcta aplicación*

de la norma vigente al momento de resolver, es decir, del artículo 21 de la ley 24.463, pues todavía no regían las modificaciones introducidas por el artículo 36 de la ley 27.423.

Lo que más allá de las resultas del recurso, los jueces en su voto parecieran poner en duda la vigencia del artículo 21 de la ley 24.463 al tiempo de resolver la 1a Instancia y su aplicabilidad en el caso concreto.

En similar dirección, en cuanto al párrafo 3° del punto IV del dictamen fiscal, que los ministros excepcionan, dice: *...la Corte Suprema ha establecido, de manera reciente, que el nuevo régimen legal previsto en la ley 27.423 no resulta aplicable a los procesos fenecidos o en trámite en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas, a los que se aplican las disposiciones normativas vigentes con anterioridad (CSJ 32/2009 (45-E) / CSI, "Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 4 de septiembre de 2018, y sus citas.*

Por lo que, si sumamos esta a la excepción *supra* referida, se podría cavilar que el proceso de Morales no necesariamente se encontraba fenecido, con etapas procesales cumplidas que impidan aplicar la ley 27.423, como de alguna forma se refirió en el presente estudio.

Una excepción muy interesante, en tanto y en cuanto a los ojos de los previsionistas —al menos subliminarmente— abre una ventana tendiente a *re-pensar* lo que corresponde aplicar a los procesos de seguridad social, antes y después de la sanción de la ley 27.423, entendiéndolo que —al menos preliminarmente— continúa cuestionada la ignominiosa aplicación de la Ley de Solidaridad Previsional y su constitucionalidad y que, de haberse traído a estudio su constitucionalidad, los efectos de "Morales" hubieran sido más agudos.

En este sentido, la fundamentación y el desarrollo de los verdaderos motivos que llevó a los ministros a manifestar su expresa excepción a los apartados referidos hubieran sido de enorme utilidad a la doctrina, ya que desde la óptica previsional, y en el marco de un derecho protectorio, quizás se pueda revertir definitivamente la jurisprudencia con relación a costas y se las carguen al ANSeS (22) tratando de evitar los referidos abusos en perjuicio de sus beneficiarios.

Un cambio a favor del vulnerable, que tal y como sucediera en el año 2005 con "Itscovich, Mabel c/ (23) ANSeS" o con "Sánchez" (24) o "Badaro" (25), exhala equidad y justicia, mejorando —al menos en algún otro aspecto— la situación irregular e inestable a la que históricamente se ha sometido a jubilados y pensionados en Argentina.

- En cuanto al segundo y tercer párrafo del apartado VI del fiscal, al que los Ministros también excepcionan, refiere: *Ante todo, creo pertinente recordar que en nuestro sistema constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa, por lo cual la admisión de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales (Fallos: 322:1726, op. cit.). En efecto, la reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994 enunció entre sus objetivos el de "atenuar el presidencialismo", al mismo tiempo que consignó la necesidad de "modernizar y fortalecer el Congreso" y "fortalecer los mecanismos de control", todo ello directamente relacionado con el fin de "perfeccionar el equilibrio de poderes". La metodología a la que se acudió fue la de incorporar ciertas facultades excepcionales de los poderes constituidos, con el fundamento de que aquello significaba la institucionalización de los mecanismos de control a los que se los sometía (Fallos: 333:633, "Consumidores Argentinos", considerando 5 °).*

Dadas las particulares características, en cierto modo relacionadas a política institucional y a la funcionalidad de sus órganos, resulta complejo opinar sobre esta excepción, sobre todo cuando son contestes los jueces en los párrafos subsiguientes del fallo "Morales" al declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 que (muy resumidamente) consideran que las facultades del Ejecutivo son excepcionales para limitar y no para ampliar el sistema presidencialista, que existe obligación de acreditar la necesidad y urgencia que justifique el dictado de un DNU, y que ante la inexistencia de una ley o ratificación por la Cámara del decreto (...) este es inconstitucional.

Sin embargo, y en cuanto a la Inconstitucionalidad del citado decreto 157/2018 (26) con el que el Ejecutivo pretende derogar el art. 36 de la ley 27.423, si bien pareciera no existir ningún reproche por resultar razonable su declaración, no habremos de dejar de mencionar la alevosía, incoherencia y contradictoria argumentación de los considerandos de la norma cuya invalidez se declara, ya que es una clara muestra de un sistema perverso patológicamente organizado para ultrajar el derecho constitucional de la seguridad social y de sus beneficiarios, en particular cuando nombra palabras de mucho contenido como *previsibilidad, seguridad jurídica, evitar situaciones que generen litigiosidad, llevar absoluta certeza jurídica en beneficio de los justiciables, y que por la naturaleza excepcional de las situaciones planteadas, ¡¡se hace imposible seguir los trámites de la CN para la sanción de las leyes!!*

No caben dudas de que tanto el Ejecutivo en su misión de proteger los derechos de sus ciudadanos, y la ANSeS, el de sus beneficiarios, saben muy bien cuáles son las situaciones jurídicas que deben resguardar y las características particulares de sus destinatarios, por lo que utilizar en su perjuicio lenguaje connotativo para mancillar sus derechos son actos jurídicos caracterizados por la mala fe (27), cuya entropía tarde o temprano terminará por derrumbar el sistema de seguridad social argentino.

Al respecto la doctrina supo considerar que *la mala fe se configura cuando el sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer determinada situación, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc., relevantes para el Derecho, a la luz de las particularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización antifuncional el ordenamiento jurídico reprueba y, por tanto, considera ilegítimo tal proceder a partir de ese momento...* Del examen efectuado, vislumbramos que la mala fe encuentra su perfil específico en el conocimiento que el sujeto tiene o debe tener de hechos, circunstancias, situaciones, datos trascendentes para el Derecho, de acuerdo con las características de cada acto jurídico.

Un mote más con el que se puede calificar la conducta antifuncional asumida por la Administradora Nacional encargada de gestionar nuestros beneficios de la seguridad social y que tanto el ordenamiento nacional como internacional reprueba.

IV. Lo relevante del fallo "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS". Costas a la vencida. Daños

Finalmente, en el acápite V del dictamen fiscal queda plasmada la estructura sobre la que se asienta el decisorio con el que se pone fin a la eterna discusión respecto de la norma aplicable para la imposición de costas en los juicios previsionales, dando luz de manera definitiva a fijar la aplicación del principio general de costas del art. 68 CPCyC, cuando expresa: Por ello... *se la confirma en lo referente a las costas de la alzada y a la declaración de inconstitucionalidad del art 3 del dec. de necesidad y urgencia 157/2018. Con costas.*

A esta altura queda claro que esta no era una discusión nueva para la Corte ni para los tribunales inferiores, ya que hay innumerables fallos de las diversas cámaras federales, tanto de apelaciones como de la seguridad social del país y sus salas que —de oficio o a petición de parte— vienen declarando inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley de Solidaridad Previsional 24.463, ya sea por simple aplicación del art. 68 del CPCyC y/o del art. 36 la ley 27.423 (B.O. 22/12/17) de Honorarios, ya sea declarando la inaplicabilidad del art. 21 de la 24.463, sus decretos y reglamentaciones de ANSeS, ello al considerar que cargar con las costas a los beneficiarios resulta contrario al carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social, a la garantía de igualdad, al derecho de propiedad constitucional y a los tratados internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 CN.

Así lo entendió ya en el año 2015 la Sala A de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba, en autos "Cattaneo, Oscar c/ ANSeS - reajuste de haberes" (Expte. N° FCB 11030058/2005/CA1) y la decisión reiterada en el año 2018, en la causa "Villafañe y otros". En idéntico sentido ha fallado la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en

causas "Estrella" y "Hernández", de 2017 y 2018, una postura en la que se encolumnan sucesivos e innumerables fallos del resto del país como la Cámara Federal de Mendoza (FMZ 2505/2019/CA1) en autos "Montoro, María c/ ANSeS s/ pensiones", que declara la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463; "Sartori, Clara Loreta c/ ANSeS s/ reajustes varios" (07/11/17); o lo resuelto en la Sala A en "Polimeni, Ovidio, Francisco c/ ANSeS reajustes varios" (15/11/2017), FMZ 26757/2019, en Soria Pedro Baldomero c/ANSeS s/ varios", de fecha 07/04/2021 s/Nº (FMZ 39543/2016/CA1), caratulados: "González, Olga Inés c/ ANSeS y otro s/pensiones", entre otros.

Y por otro lado en dirección adversa a la *supra* mencionada (aun en la actualidad) algunas salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, más allá de la vigencia de la ley 27.423, siguen resolviendo "costas por su orden" y aplicando el art. 21 ley 24.463, como los fallos: "Cola, Ricardo Antonio c/ ANSeS s/reajustes varios", 20/08/2020; "Colman Torales, Benicio c/ ANSeS s/ reajustes varios", causa Nº 65.153/2016, de fecha 03/02/2021; "Pechia, Miguel Ángel c/ ANSeS s/reajustes varios" (22/04/2022); Cámara Federal de la Seguridad Social - sala 3, Expte. Nº 94094/2015 autos: "Pinho Ernesto Oscar c/ ANSeS s/reajustes varios", 04/08/2022, etc.

La mayoría de ellos invocando a "Flagello, Vicente c/ ANSeS s/" (331:1873), un fallo del 2008 por el que la Corte revocó la sentencia de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que declaraba la inconstitucionalidad del art. 21 ley 24.463 e impone las costas en el orden causado; un verdadero flagelo para la comunidad de adultos mayores argentinos, ya que, como se viene afirmando, es la propia ANSeS la que crea las condiciones fácticas y jurídicas para obligar a jubilados a demandar por sus derechos, constriñéndolos a pagar con sus exiguos haberes los gastos causídicos de los eternos litigios previsionales. Fallo en el que —como ya se aclaró— los jueces Fayt y Petracchi votaron en disidencia al estimar que la distribución de las costas por su orden en todos los casos no se compadece con los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en la materia [\(28\)](#).

Doctrina que a poco andar se modifica con el dictado del fallo "Patiño Raúl Osvaldo c/ Gobierno Pcia. de San Juan (Unidad de Control Prev.) s/ amparo por mora de la administración" del año 2009 [\(29\)](#) que, por el voto mayoritario de los ministros, determinó que resultaba discriminatoria la exclusión de los jubilados de la aplicación del criterio general en materia de costas, con sustento en el art. 21 de la Ley de Solidaridad Previsional 24.463, donde se ordena su distribución en el orden causado. Jurisprudencia a la que se le suma lo decidido en "González, Carmen c/ ANSeS s/ prestaciones varias" (aplicable a Ejecución de Sentencia) [\(30\)](#) y otras tantas en referencia a los amparos [\(31\)](#).

Finalmente los mejores resultados del fallo que se comenta es que los derechos reconocidos recientemente en "Morales" ya comenzaron a erigirse —y otra vez de manos de jueces del interior del país— que declaran la aplicación del *principio general de la derrota* conforme precedente "Morales".

Se trae a colación el fallo del 07/07/23 de la Cámara Federal de Salta, Sala II, "Mogro, María Elena c/ ANSeS s/ reajuste de haberes" (Expte. Nº FSA 4046/2020) [Juzgado Federal de Jujuy Nº 1], expresa en el punto 6º del fallo: "Que, por último, atento al deber que tiene los Tribunales Inferiores de adecuar sus sentencias a las de la CSJN y a la reciente doctrina sentada por el Alto Tribunal en materia de costas en el precedente "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" sentencia del 22/06/2023, corresponde imponer las costas de Alzada a la vencida, conforme lo normado por el art. 36 de la ley 27.423".

A la que le sumamos otra perlitita con lo resuelto por la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, en causa Nº 8489/2018 "Jullier, Juan Emiliano c/ ANSeS daños y perjuicios" (27/06/2023), sentencia que no solo se aplica el principio general de costas a la vencida, sino que, en relación con las demoras innecesarias, y la impróspera y abusiva litigiosidad generada por ANSeS, la Cámara le pone precio a la insidiosa demora de más de diez [10] años en el cumplimiento de varias sentencias de reajuste de haberes, ordenando pagar indemnización y dice: *Corresponde hacer*

lugar a la demanda por la suma de \$200.000 en concepto de daño moral con más los intereses fijados.

Un daño que viene siendo reconocido en variados fallos, en su mayoría en el ámbito civil y comercial, como lo fuera en el caso de "Canepa, José Domingo c/ ANSeS y otro s/ ordinario", por medio del cual la Cámara Federal de Rosario ya en año 2014 impuso las costas a la demandada vencida, pero además invocando el art. 75 inc. 22 y el Pacto de San José de Costa Rica fijó el daño moral por las demoras del reajuste, en la suma equivalente a veinte haberes previsionales —en valores al día de la fecha de este fallo—, con más los intereses —desde la fecha de promoción de esta demanda— (art. 165 CPCyC). Un caso concordante con lo ya resuelto en Expte. N° 5492 "Bustos, Carlos Alberto c/ ANSeS s/ Daños y Perjuicios".

En síntesis, la decisión de la Corte Suprema en el fallo "Morales" si bien define claramente una postura más justa desde el máximo tribunal con relación al tema de las costas, no por ello podemos considerar que de modo alguno se logre un verdadero cambio de la situación, donde Estado Nacional a través del ANSeS hace transitar y padecer a sus afiliados por medio de largos procesos judiciales; para ello no solo se necesitan intérpretes de la ley, sino normativa ajustada a Derecho.

V. Otras miradas, nuevos paradigmas y la importancia de los principios de la seguridad social

En esta dirección es importante destacar que tanto los tribunales inferiores como la Corte Suprema, con relación a la materia, vienen mencionando los "principios", como base y fundamento de sus decisiones, un tema de enorme jerarquía que muestra los vientos de cambio que vienen soplando para el universo de la seguridad social.

Es aquí donde el control de constitucionalidad y la razonabilidad fundada toman vigencia, tal y como los jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia lo indican en el fallo que se comenta, siendo que solo ellos mediante sus decisiones pueden diseñar y poner en marcha un esquema coherente en el que la interpretación de la ley, las disposiciones de la Constitución, los principios y los valores jurídicos se integren y adecuen cuasi artesanalmente al caso concreto, legitimando el cambio de paradigma.

En este sentido fue muy importante el reconocimiento expreso que hizo el Código Civil y Comercial de la Nación a partir de sus modificaciones —con relación a los derechos personalísimos—, lo que se erige como pilar del sistema de derechos y hace huella en el marco axiológico de la "dignidad humana", derramando sus efectos a todo el sistema jurídico y por ende a la seguridad social.

Situación de hecho y de derecho que pone a cargo de la estructura del poder público sus deberes y obligaciones para instituir una igualdad real, una verdadera ética de los vulnerables que confiera de manera efectiva la tutela de personas que por su debilidad la precisan, como lo son los adultos mayores reconocidos expresamente por el art. 75 inc. 23 CN.

Ello es así, y más temprano que tarde todas aquellas acciones que de manera ligera continúen atropellando los principios de la seguridad social, como lo son la *solidaridad* (32), la *subsidiariedad* (33), la *universalidad*, la *integralidad* (art. 14 bis CN), la *inmediatez* (34), el principio *in dubio pro justitia socialis* (35) y *el de progresividad*, no solo harán cargo de las costas al ANSeS, sino de los daños y perjuicios que sus ilegítimas acciones ocasionan, ya que no se pueden tolerar tantos excesos contra la masa pasiva, al aprovecharse de su vulnerabilidad.

Por su parte tampoco es un tema menor "la declaración de vulnerabilidad de personas mayores" y el análisis que realizó la Corte Suprema en Fallos: 344:3567 07/12/2021 "Garay Corina Elena c/ ANSeS S/ reajustes varios", sentencia por la que ordena al ANSeS devolver el impuesto a las ganancias que le había descontado en el expediente judicial, considerando que la decisión de sujetar a la accionante a un nuevo trámite administrativo configura un *exceso ritual manifiesto* que

puede frustrar la sustancia de su derecho conforme al desenvolvimiento natural de los hechos (Fallos: 316:779, citado en "C., J. C.", ya citado).

Allí los miembros del más alto tribunal evocan los "principios", que —como es de público conocimiento— no solo parecen reformular el orden preceptivo a partir del proceso de constitucionalización del Derecho privado, sino que han permeado todos los microsistemas jurídicos, presentándose como una plataforma de "mínimos" sobre la que se asienta el sistema de Derecho argentino actual y a la que el alto tribunal viene mostrando su apego en causas que otrora fueran desestimadas.

Ricardo Lorenzetti en su obra "*Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho*" (36) supo referir que toda una generación de juristas vive ahora la *era del desorden* en la que se ha producido un fenómeno de materialización del Derecho; el sistema es cada vez más abierto y permeable a la incorporación de criterios que provienen de otras áreas, que se introducen a través de "principios y valores" que han comenzado a penetrar profundamente en los procesos previsionales.

Lo que deja en claro la importancia de darle un verdadero enfoque de derechos humanos a las sentencias, de modo que el Poder Judicial, no perdiendo la mira de lo dispuesto en los tratados internacionales, pueda sustentar sus decisiones en el paradigma protectorio que impregna la ciencia jurídica del siglo XXI, otorgándole valor a los intereses atinentes a la esfera vital de la persona, sin que los magistrados tengan que danzar al ritmo de la política económica de turno.

VI. Conclusión

Bien el fallo "Morales" ofrece un gran impulso tendiente a generar seguridad jurídica con relación a la norma aplicable en materia de costas en seguridad social —lo que posiblemente lleve confianza a los magistrados especialistas a la hora de decidir a quién se deben cargar los gastos causídicos en juicios previsionales—, la realidad es que ha llegado la hora de realizar un cambio legislativo adecuado a los principios y al orden normativo de la seguridad social.

Ello es así, ya que si el ANSeS continúa sin ajustar sus acciones a derecho, pronto comenzarán a desbordarse los juzgados civiles con juicios de jubilados reclamando los daños y perjuicios ocasionados por la aplicación normas injustas, un indeseable escenario —que por distintas, pero similares, situaciones en seguridad social— ya padecieron los tribunales argentinos y es de público conocimiento.

(A) Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada, Docente-Investigadora (UNSJ).

(1) Este decreto en su art. 3º deroga el artículo 36 de la ley 27.423 de Honorarios profesionales abogados, procuradores... que establece Que las costas se impondrán de acuerdo con lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado.

(2) CFed. Seg. Social, sala II, "Ibáñez, Máximo c/ANSeS s/reajustes varios", 08/09/2005 "Si bien el actor no apeló la sentencia de grado, ello no autoriza a concluir que su decisión en este sentido respondió a que sus pretensiones fueron plenamente satisfechas por el juzgador, pues no solo dejó claramente sentada en la demanda su categórica disconformidad con la doctrina "Chocobar, Sixto Celestino", sino también aludió a la carencia de medios impugnativos eficaces para cuestionarla en ese momento, dada la fuerza vinculante que revestía para los jueces inferiores, según lo ordenaba la patética y a su vez superflua disposición normativa contenida en el art. 19 de la ley 24.463 que en ese momento se hallaba vigente" (Del voto en minoría del Dr. Herrero).

(3) Discusión dirimida en la Corte Suprema, "Capa, Néstor Fernando c/ ANSeS y otros s/ reajustes varios", 16/10/09 CFed. Seg. Social, Sala II, hizo lugar a una cautelar para extender la movilidad de oficio conforme la Corte en fallo Badaro".

(4) Ley 24.463 (de 1995) de Reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Reforma a la Legislación Previsional. Movilidad de las prestaciones (SIJP). Mejora de los haberes mínimos. Haberes máximos. Orden público. Derogación. Reforma al Procedimiento Judicial de la Seguridad Social. art.21. En todos los casos las costas serán por su orden.

(5) MORIN, Edgar (2008): "El problema teórico de la complejidad es el de la posibilidad de entrar a las cajas negras, Es considerar la complejidad organizacional y la complejidad lógica. En este caso la dificultad no está solamente en renovar la concepción del objeto, sino en revertir las perspectivas epistemológicas del sujeto, es decir el observador científico, lo propiamente científico era hasta el presente eliminar la precisión, la ambigüedad, la contradicción. Pero hace falta aceptar cierta imprecisión y una precisión incierta no solamente en los fenómenos, sino también en los conceptos, (Ed. Gedisa ps. 60).

(6) CARNOTA, Walter F. - MARANIELLO, Patricio A., "Los jueces y los procesos de integración", en Tratado de los Tratados Internacionales; La Ley, Buenos Aires, 2011, t. I. De la figura del juez neutro y aséptico se ha pasado a un jugador comprometido con la defensa y promoción de los Derechos Humanos... Cuando la Corte Interamericana reclama la capacidad previsor del control de convencionalidad no solo a petición de parte, sino de oficio parece evocar un tribunal constitucional... Queda claro que nos hallamos inmersos en el paradigma de los Derechos Humanos... y dentro de ese esquema el juzgador asume una relevancia de primerísimo nivel. Los derechos no solo están escritos en declaraciones constitucionales e Internacionales, sino que además son "descubiertos" por los magistrados.

(7) Ley 27.423 art. 36.- En las causas de seguridad social los honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el CPCCN, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado.

(8) SAGGESE, Roberto M. A., "El control de razonabilidad en el Sistema Constitucional Argentino", Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, 1ª ed. La razonabilidad es un concepto jurídico que la Corte Suprema ha utilizado en la mayoría de los casos en los que ha ejercido el control de convencionalidad (agrega el autor) que en el ámbito de derecho fiscal y de emergencia económica es donde más frecuentemente se ha utilizado la aplicación de la regla de razonabilidad; la razonabilidad constituye la medida de la constitucionalidad (ps. 134).

(9) Art. 17, Protección de los Ancianos: Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. Los Estados parte se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. Protocolo de San Salvador, que corresponde al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (DESC) San Salvador 17/11/1988 - Argentina 23/10/ 2003.

(10) "Declaración y el Programa de Acción de Viena", Aprobado por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (1993), que incorpora la progresividad de los Derechos de Segunda Generación.

(11) PAWLOWSKI de POSE, Amanda Lucía, DT, 1999, p. 234, Ed. La Ley S.A.E. e I.

(12) Fallo 332:1298, "Patiño, Raúl Osvaldo C/Provincia de San Juan", donde los ministros sostuvieron que el organismo previsional había generado de modo "irrazonable" la prolongación del juicio con los gastos consiguientes...; y que constatada la conducta "arbitraria y abusiva" de la demandada en el pleito bajo examen y a fin de asegurar la vigencia de la garantía constitucional del artículo 17 CN confirma el fallo que desplazó el artículo 21 de la ley 24.463". (voto mayoritario de la Corte).

(13) TORANZO, María Rosana, "El derecho de daños en la Seguridad Social", Ed. UNSJ, 2014. Aberraciones jurídicas tan grandes como la excepción de falta de recursos (art. 16 ley 24.463) imposición de las costas por el orden causado (art. 21 íd.) y la retrogradación del procedimiento (art. 24) son muestras acabadas de ello, que instan a la inminente derogación del sistema y su

inmediata reestructuración en el marco y bajo los paradigmas enunciados supra. Los nuevos constitucionalismos lo exigen así, al asignar prioridad y privilegio a los principios y valores (Alexy) obligando pasar del mero Estado legal al Estado constitucional de Derecho (Zagrebelsky).

(14) Sobre esto refiere el voto en minoría del Dr. Herrero en Fallo 322:1318; "Una hermenéutica mutativa o irrazonable de la resolución del Alto Tribunal pronunciada en el caso "Andino, Basilio Modesto c/ANSeS s/reajustes varios", ...en la que se invoca la cosa juzgada, las normas procesales en juego, el debido proceso y otras garantías constitucionales, para desestimar la petición de la actora que se le hiciera extensiva sin más la solución del precedente "Sánchez, María del Carmen" como hecho nuevo, conduciría al despropósito de tener que aplicar en las sentencias de todas las instancias —incluida la extraordinaria— la doctrina "Chocobar" a los 27.620 juicios por reajustes iniciados con anterioridad al precedente "Sánchez" que se hallan actualmente en trámite" (de los cuales 24.907 corresponden a primera instancia y 2.713 a segunda instancia, según datos proporcionados por el departamento informático de la Cámara), por imperio de las "perversas" (¡!) e "ineluctables" (¡!) reglas de congruencia, preclusión, cosa juzgada, etc., que interpretadas de tal guisa no cabe duda que convertirían al proceso —modo— en una suerte de "lecho de Procusto".

(15) FALCONE, Andrea (2018). Desde hace varias semanas la ANSeS apela masivamente a la Corte Suprema los juicios de los jubilados. El organismo previsional tiene firmado desde 2009 un acuerdo ante la Corte Interamericana, a fin de no apelar reclamos que versen sobre asuntos ya resueltos por la Corte Suprema. Por otra parte, el presidente Mauricio Macri firmó en 2016 un decreto en el cual ratificaba el compromiso de no seguir dilatando innecesariamente los juicios de reajustes de haberes. Todo quedó en letra muerta, cuando ANSeS, ante el rechazo de los recursos a la Corte por parte de la Cámara de Apelaciones, presenta desde hace varias semanas más de 6000 recursos de queja mensuales. <https://www.ambito.com/economia/jubilados-anses-bloquea-brutalmente-la-justicia-n4024520>

(16) La sentencia definitiva deriva de la demanda de impugnación de un acto administrativo de la ANSeS que deniega la prestación a Blanca Morales, argumentando que las cotizaciones no habían sido ingresadas de manera contemporánea al desempeño del actor como autónomo y en que, en virtud de la edad del causante a la fecha de su fallecimiento, podría haber acreditado, al menos, 30 años de aportes, por lo que el juzgador basado en los precedentes "Tarditti", "Pinto Ángela" y "Anconetani", hizo lugar al planteo accionante tras considerar que el término de servicios que computa el causante —que es de 23 años, 3 meses y 27 días presentados— supera proporcionalmente el que resulta necesario para considerarlo aportante regular...tras su fallecimiento, le reconoce al causante la calidad de aportante regular y ordena a la demandada otorgarle a la accionante el beneficio de pensión solicitado, abonándole las diferencias retroactivas, de conformidad con lo expresado en sus Considerandos, debiendo aplicar para el cálculo de los intereses la tasa pasiva del BCRA.

(17) BAZÁN, Víctor, "La interacción del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Argentina", Estudios Constitucionales, Año 5, N° 2, 2007, ps. 137-183, ISSN 0718-0195; Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca. Para medir en un plano general de discusión la trascendencia de la labor interpretativa a cargo de los tribunales, no debe olvidarse que el aseguramiento de la primacía constitucional —en interacción con las normas, principios y valores aportados por el derecho internacional de los derechos humanos— y la fuerza normativa de la Ley Fundamental, justamente dependen en buena medida de la tarea de hermenéutica constitucional, pues —como con elocuencia se ha afirmado— la interpretación constitucional "puede modificar, anular o vivificar la Constitución, o puede hacer que el sistema agonice o resplandezca".

(18) EISNER, Isidoro (1981). La cosa juzgada se manifiesta como un atributo de las sentencias judiciales que siendo insusceptibles de ser atacadas o alteradas, dentro del proceso o fuera de él, otorga la certeza definitiva de la "verdad legal". Con su acatamiento se consagra la vigencia del

valor "seguridad" que tanto interesa a la comunidad al poner fin a los litigios e imponer respeto por los resultados procesales.

(19) JOSERAND, Loïs, "Del abuso del Derecho y otros ensayos", Temis, Bogotá, Colombia. El factor determinante para la caracterización del acto como abusivo es el de la desviación del derecho de su función social. ()

(20) ROJAS, Jorge, "Recurso Extraordinario Federal", Rubinzal - Culzoni Editores, 2019, 1ª ed., Santa Fe, ps. 175.

(21) Del voto de la minoría compuesta por los jueces Lorenzetti, Fayt y Petracchi no corresponde retacear el carácter integral e irrenunciable que tienen los beneficios de la seguridad social mediante disposiciones cuya aplicación disminuye de manera sustancial el crédito del beneficiario de una jubilación o pensión, la distribución de las costas por su orden en todos los casos no se compadece con los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en materia previsional. (fallo "Flagello, Vicente c/ANSeS).

(22) CS, "Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios", 28/07/2005, Fallos: 328:2833; En este fallo no se justificó el incumplimiento de la Administración y los ministros indican:... el poder administrador, a cuyo cargo estaba el estricto cumplimiento de la ley, no puede obviar la confección del índice que debía ser confeccionado por la Secretaría de Seguridad Social ni corresponde aceptar excusas, pues lo contrario importaría admitir que la omisión de la autoridad podría privar de eficacia al derecho reconocido por la ley y causar una grave lesión de orden constitucional sin razón suficiente que lo justifique. Otro: "Flagello, Vicente c/ ANSeS s/interrupción de prescripción" (votos en disidencia de los jueces Fayt y Petracchi (agosto 2008) "resulta discriminatorio excluir a los jubilados de la aplicación del criterio general y la invocación de que tanto éstos como la ANSeS se encuentran en la misma situación procesal merece reparos", quienes persiguen obtener un derecho acudiendo a los tribunales, deben realizar múltiples erogaciones que configuran un perjuicio patrimonial que no requiere demostración alguna, "mientras que el organismo previsional cuenta con medios para enfrentar el proceso de conocimiento". En consecuencia, la distribución de las costas por su orden, no se compadece con los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en la materia.

(23) Declaró la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24.463 y dijo; carece actualmente de la racionalidad exigida por la Ley Fundamental y por ello debe declararse su invalidez, toda vez que cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la ley en que se encuentra inserto o bien su aplicación torna ilusorios aquellos, de modo tal que llegue, incluso, a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional, es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la supremacía de la Constitución Federal... aguardar una sentencia ordinaria de la Corte Suprema, los coloca en situación de notoria desventaja y disparidad... afectando el derecho de propiedad, a la vida, a la salud y a la dignidad propia de ésta como atributo de la persona (voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni).

(24) CS, "Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ Reajustes varios", 17/05/2005, Fallos 328:2833. 3- Esta Corte ratifica los principios básicos de interpretación sentados acerca de la naturaleza substitutiva que tienen las prestaciones previsionales y rechaza toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar "Jubilaciones y pensiones móviles" según el art. 14 bis de la CN y los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en esta materia. Los Tratados Internacionales vigentes, obligan a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos, otorgadas por el art. 75 inc. 23, de la ley fundamental reformada en 1994 con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en particular a los ancianos...

(25) CS, "Badaro, Adolfo", 08/08/2006... La necesaria proporcionalidad debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza substitutiva que debe reconocérsele a la prestación, y que el jubilado conserve una situación patrimonial equilibrada a la que le hubiera correspondido en actividad (Fallos CS 305-I-868 30/06/86, Consid. 14).

[\(26\)](#) El decreto miente cuando expresa que la ley 27.423 no derogó las leyes 24.463 y sus modificatorias, 27.260 y 27.348, pasa por alto el art. 36 del citado cuerpo legal, luego lo deroga; miente cuando dice que los casos alcanzados por las leyes 24.463, sus modificatorias y 27.260 no se encuentran regulados por las disposiciones de la ley 27.423, dado el carácter de ley especial, donde el Ejecutivo inventa falazmente que por el art. 2º CCyC, que establece que la key, debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento, permite entender que no sería razonable aplicar la ley 27.423 en detrimento de lo establecido en la ley 24.463, por el carácter especial de éstas y su finalidad; y justificándose en la posibilidad que se generen conflictos en la interpretación...

[\(27\)](#) ALFERILLO, Pascual E., "La "mala fe" (The legal concept of bad faith)", (2011) ISSN:0041-9060: .

[\(28\)](#) Del voto en disidencia Fayt y Petracchi "resulta discriminatorio excluir a los jubilados de la aplicación del criterio general", por lo que decidieron que se debía invalidar la norma impugnada por ser contraria a la Constitución Nacional y debía decidirse la cuestión según los principios generales establecidos en el ordenamiento procesal.

[\(29\)](#) Fallos: 332:1298 año 2009.

[\(30\)](#) Fallos: 341:762 año 2018.

[\(31\)](#) JFed. Nº 1, Tucumán, en la causa "Rodríguez, María Justina c/ ANSeS s/ amparo por mora de la administración" se hace lugar al recurso de amparo por mora de la administración e impuso las costas a la vencida, apeló la demandada (Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, "P. M. E. c/ ANSeS s/ Amparo ley 16.986", 06/09/2021 (entre otros).

[\(32\)](#) CHIRINOS, Bernabé L., "Tratado de la Seguridad Social", La Ley, Buenos Aires, 2009, 1ª ed., ISBN 978-987-03-1510-0, Tomo III. p.46: Este principio está sustentado en la dignidad humana y es el rector de la ética social que es el reconocimiento del dominio de la humanidad respecto de las cosas... expresa la unidad de la generación activa respecto de la pasiva manifestada en la obligación contributiva de quienes están agrupados en el sector activo de la pirámide demográfica, a fin de colaborar para cubrir las contingencias del sector pasivo. (art. 16 ley 24241).

[\(33\)](#) In sic Chirinos dice que el Estado debe asumir la función a través de la sanción y promulgación de leyes, servicios de identificación, poder de policía o control del cumplimiento de las normas, integración de la política de la SS con la superior del gobierno. Tales funciones se materializan en la acción del Estado tendiente a la prestación de los servicios.

[\(34\)](#) La protección contra el desamparo y la cobertura ante el riesgo debe ser a tiempo para que las personas puedan continuar con sus proyectos de vida.

[\(35\)](#) CS, "Berçaitz, Miguel", 13/09/1974, Fallos: 289:430: El objetivo preeminente de la Constitución es lograr el bienestar general, es decir, la justicia en su más alta expresión, la justicia social. Tiene categoría constitucional el principio: in dubio pro justitia socialis, con arreglo al cual las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes, de tal manera, consiguen o tienden a alcanzar el bienestar, art. 75 inc. 19 y 23 CN.

[\(36\)](#) LORENZETTI, Ricardo Luis, "Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho", Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, 1ª ed.